**Interpongo demanda**

**Sumario:** FAD 2015. Integralidad del haber: actualización de remuneraciones- PBU- tasa de complementación - Movilidad del tope del haber máximo - Inaplicabilidad tope Art 14 de la Res 06.09 - Movilidad del haber jubilatorio- - inaplicabilidad de impuesto a las ganancias. Inaplicabilidad del articulo 9

**Señor Juez Federal:**

Julia Tamara Toyos, ABOGADA, matrícula federal registrada en el tomo 108 folio 978, constituyendo domicilio procesal en Belgrano 1188 de esta ciudad de Salta, y domicilio electrónico registrado bajo el CUIL 27266852806, en mi carácter de apoderada del Sr. Octavio Galván a VS muy respetuosamente me presento y digo:

1. **PERSONERÍA:**

Que tal como lo acredito con Acta Poder de la Cámara Federal de Salta, que acompaño a la presente, soy apoderada del Sr. Octavio Galván, DNI Nº 44873539 con domicilio real en Ohiggins 1673, de esta ciudad de Salta, para actuar en su nombre y representación en acción o recurso que corresponda contra ANSES y/ o Poder Ejecutivo Nacional.

1. **OBJETO:**

Que, por intermedio de la presente, vengo a interponer demanda en contra de ANSES (UDAI Salta), con domicilio en calle Jujuy Nº 43 de la Ciudad de Salta, a los efectos de solicitar:

* 1. Se ordene a la demandada a que reajuste el haber de mi mandante garantizando que su primer haber sea integral, sustitutivo del salario y del esfuerzo contributivo realizado.
  2. Se ordene se aplique una movilidad que mantenga el valor de la prestación en el tiempo y repare el daño ocasionado por la movilidad de las leyes N° 27.426, 27541 y 27.609, y las que en el futuro pudiera ocasionar el decreto 274/24,o las normas que se dicten respecto de la movilidad del haber en contradicción con el mandato constitucional.
  3. Se abonen las diferencias adeudadas actualizadas a fin de mantener el valor de la deuda reclamada con más intereses que cumplan con la función resarcitoria hasta el efectivo pago.
  4. Se fijen las costas a la vencida.
  5. Se declare la inaplicabilidad del impuesto a las ganancias de mi mandante
  6. Se ordene un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia, consignando en la misma que al vencimiento del plazo señalado se aplicaran intereses sancionatorios para evitar la mora sistemática en que incurre el demandado.

1. **SOLICITO LEGAL INTERVENCIÓN**

Conforme lo dispone el decreto ley 15/75, y en virtud de lo dispuesto en los art 23 inc a, b, d , 50, 51,52, 53 y 55, solicito se de intervención a la Caja de Seguridad Social para abogados de Salta con domicilio real en Avda. Sarmiento N° 308/302, Cuil 30-51872348-7.

1. **HABILITACIÓN DE INSTANCIA:**

Tal como surge de la demanda interpuesta cuya reserva se solicitó, se habilita la instancia a partir de la denegatoria de la solicitud de reajuste de haberes que figura en el sistema de Anses con fecha 25/10/2024 , que recayó en el expte N° 45454.23.1, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 inc a, inc. b punto I y II de la ley N° 19549 modificada por la ley N° 27.742, respecto de la innecesaridad del reclamo previo en cuestiones que hagan a la inconstitucionalidad o invalidez de una norma superior o cuando constituya un ritualismo inútil, la presente vía se encuentra habilitada.

1. **Antecedentes del beneficio previsional**

Conforme las constancias emitidas por la demandada del detalle de beneficio que se adjunta, los datos del beneficio previsional otorgado por Anses son:

1. Fecha de adquisición del derecho: 25/07/2003
2. Beneficio: None
3. Expediente: 45454.23.1
4. Periodos de remuneraciones tomados: 25/07/2003 al 25/07/2003
5. Servicios Autonomos: No tiene
6. Fecha de cese: 25/07/2003
7. Última remuneración en actividad: $56.566,00 al 25/07/2003 conforme PRPA
8. Última remuneración actualizada por Anses $56.565,00
9. Fecha de Alta del primer haber: 25/07/2003
10. Monto Primer haber jubilatorio: $56.556,00
11. Tasa de reemplazo = 35656 % (Jubilación/Salario en actividad actualizado con índice de Anses)
12. Servicios en Dependencia: No tiene
13. Haber percibido al 25/07/2003: $6.233,00
14. Fecha de inicio del Reclamo administrativo interruptivo de la prescripción: 25/07/2003
15. **De lo reclamado**
    1. **De la integralidad del haber:**

Teniendo en cuenta que el primer haber percibido por mi mandante no cumple con la pauta de integralidad que establece el artículo 14 bis, y advirtiendo que, con posterioridad a la obtención del beneficio, los sucesivas pautas de movilidad fijadas por el legislador y el poder ejecutivo, resultaron insuficientes , afectando la naturaleza del derecho a la movilidad, por la cual fue incorporada la misma en la reforma de la constitución de 1957, sumando a los principios jurisprudenciales desarrollados por la Corte suprema de justicia de la Nación que fueron dotando de contenido al mismo y las normas que surgen de los tratados y convenciones internacionales que el Estado Argentino se obligó a cumplir, y siendo necesario que los adultos mayores puedan tener una vejez digna, que no afecte su proyecto de vida, que refleje el esfuerzo contributivo realizado , que se respete del derecho al desarrollo humano con justicia social, independientemente de la emergencias de nuestro país, que , como bien lo dijo la CSJN en el fallo Blanco, se necesita que en épocas de crisis se activen los mecanismos necesarios de protección , sobre todo a los grupos más vulnerables.

La crisis económica no puede invocarse como causal para convalidad la omisión del poder legislativo de fijar una correcta policita previsional, que permita proteger a mi mandante, y cumplir mediante medidas de acción positiva, con la manda constitucional, por cuanto no puede perderse de vista que los fondos del estado han mermado por corrupción, mala administración , o desvío para los cuales no han sido destinados , afectando las arcas del Estado y siendo la justificación-irrazonable- de la imposibilidad de pagar un haber integral a quien se encuentra transitando la última etapa de su vida.

Es arraigada la doctrina sobre el contenido y alcance de la garantía constitucional de movilidad y de los dos pilares en las cuales se sustenta la misma, a saber, los principios de proporcionalidad y de sustitutividad (C.N. art. 14 bis), que obligan al legislador y al juez -cada uno en su ámbito de actuación o zona de reserva constitucional- a cuantificar la sustitutividad razonable que corresponde aplicar, tanto para la determinación del haber inicial, cuanto para su movilidad futura.

Lo peticionado por mi mandante en la presente demanda no se funda en la aplicación de un régimen derogado sino en la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre la integralidad del haber

De lo expuesto hasta aquí, corresponde señalar que no resulta suficiente ni acertado que solamente se verifique que las remuneraciones percibidas estén actualizadas. Es indispensable constatar, al mismo tiempo, si el resultado de esta actualización se ajusta a los lineamientos trazados por la CSJN en torno al sentido y alcance de la garantía constitucional de movilidad; es decir, si la suma resultante de esta repotenciación deviene razonablemente proporcional al salario de actividad, o no.

Ha dicho la Corte que *“… El principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad…”* Bercaitz, Miguel Ángel”, 12-9-1974, Fallos: 289:430, es decir qué durante la vida pasiva se debe mantener el necesario principio de proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo y la magnitud de la prestación.

En los casos “Badaro” y “Elliff”, nuestro Máximo Tribunal vuelve a insistir que “la movilidad de que se trata, no es un ajuste por inflación, como pretende el actor sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para lo cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (Fallos: 293:551; 295:674; 297:146; 300:616, entre muchos otros).” (id. “Badaro”, considerando 14º).

“Que, desde tal perspectiva, el Tribunal ha destacado que la prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor (fallos: 289:430; 292:447; 293:26; 294:83, entre muchos otros), de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía percibiendo y que definían la cuantía de sus aportes. Ello ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad (Fallos: 279:389; 300:84; 305:2126; 328:16021).”

Finalmente, en el fallo dictado por la Corte Suprema en el caso “Blanco Lucio Orlando” ha reafirmado este principio en los Considerandos 12 y 25 y decidió poner en conocimiento del Congreso Nacional la decisión adoptada en el caso, *“(…) a fin de que en un plazo razonable haga uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado, fijando el contenido concreto de las jubilaciones en el período en debate, con especial ponderación de los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por este Tribunal en numerosos precedentes (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602), de conformidad con la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de derechos sociales”.*

**5.1.3. De la actualización de las remuneraciones**

A fin de dar cumplimiento con el principio de integralidad que establece el art. 14 bis de la CN, es menester que las remuneraciones que sirven de base para el cálculo estén correctamente actualizadas con un índice que mantenga la cuantía de las remuneraciones a lo largo del tiempo.

Expresamente solicito que, teniendo en cuenta que la CSJN ha destacado en el fallo [Elliff, Alberto José](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6702111&cache=1722256264278), en el considerando 11, que la prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el jubilado como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y su núcleo familiar las remuneraciones que venía percibiendo y que definían la cuantía de sus aportes. Ello ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y actividad.

La doctrina del Máximo Tribunal delineó los siguientes puntos al respecto: 1) El haber previsional es de “*naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral*”. (CSJN, causa “Sánchez”, 17/05/05); 2) Corresponde *“fijar el primer haber en un nivel acorde con el que el peticionario tenía en los últimos años de su vida laboral”* (CSJN, causa “Monzo”, 15/08/06); 3) La jubilación debe asegurar un nivel de vida que guarde *“una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía percibiendo y que definían la cuantía de sus aportes*” (CSJN, causa “Elliff”, 11/08/09).

Durante los 30 años de vigencia de la ley 24.241 se han determinado diferentes modalidades de actualización de las remuneraciones. El organismo previsional al momento de sancionarse la ley 24.241 escogió en su reglamentación el índice ISBIC para la actualización de las remuneraciones por considerarlo un índice salarial y oficial que podía acompañar la evolución de los salarios de los activos para cubrir el principio de integralidad, mediante la resolución 140/95 , no obstante, puso un límite a la aplicación temporal de ese índice por considerar que la ley N° 23.928, además de prohibir toda indexación desde el 31/03/1991, dio estabilidad a los precios y salarios, de modo que no registraron variaciones durante el período en cuestión. Por tanto, ello impedía cualquier actualización de remuneraciones posterior al 31/03/1991. La circunstancia precedentemente relatada, motivó que la CSJN en el fallo “Elliff” dispusiera que ese límite temporal debía levantarse y, en consecuencia, actualizarse las remuneraciones hasta la fecha de adquisición del beneficio.

Solicito a VS que, teniendo en cuenta que todas las remuneraciones que forman parte del ingreso base son anteriores al 2.09, se aplique Isbic al 2.09 para actualizar las mismas a la fecha de adquisición del derecho y luego, si un índice mensual para determinar el haber.

Con la sanción de la **ley 26.417**, en la mecánica de actualización de las remuneraciones, modifica el artículo 24 de la ley 24241 y faculta a la Secretaría de Seguridad Social *“a dictar las normas reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del promedio”*.

En uso de sus facultades, se dictó la Resolución SSS 06/2009, que en su artículo 14º inc. 2 delegó en ANSES la elaboración del índice previsto en el artículo 32 de la ley 24.241, y la determinación de los coeficientes aplicables *“a fin de practicar la actualización de las remuneraciones que dispone el art. 24, inciso a) de la citada ley, el cual se aplicará según los criterios definidos en la presente resolución, para las prestaciones cuyos titulares hubieran cesado a partir del 28 de febrero de 2009 inclusive.”* Consecuentemente, ANSES emitió la Resolución 135/09 y sucesivas que disponen el empleo de distintos coeficientes de actualización de las remuneraciones.

Posteriormente, se dicta el Decreto 807/2016, que dispuso que el índice de actualización de las remuneraciones de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del artículo 24 inciso a) y 97 de la ley 24241 deberá incluir: 1) Hasta el 31/03/1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR); 2) Entre el 01/04/1995 y el 30/06/2008 las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); 3) A partir del 01/01/2008 las variaciones resultantes de la movilidad establecida por la ley 26417.

Expresamente se peticiona la inconstitucionalidad del Decreto 807/16, la Resolución ANSES 56/18 y Resolución SSS 1/2018 por cuanto pretende reglamentar periodos anteriores al 02-2009 con un índice diferente al establecido por la CSJN en “Elliff” y luego en “Blanco”, donde el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 56/18 de ANSES y de la Resolución SSSS 01/2018, que reglamentan el art 24 de la ley 24.241, remitiendo a las disposiciones de la Ley 27.260 de Reparación Histórica.

W de caja: $39.188,25

W con isbic al 2009 y luego Anses $45.062,21

**5.2 Movilidad**

La Corte ha ratificado los principios básicos de interpretación sentados acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales y ha rechazado toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar "jubilaciones y pensiones móviles", según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en esta materia. Ello en tanto, según sostuvo, los tratados internacionales vigentes, lejos de limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos, compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en 1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos.

Por ello ha señalado que es atribución y deber del legislador fijar el contenido concreto de esa garantía teniendo en cuenta la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales. Una inteligencia sistemática de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de justicia social que persigue el art. 14 bis, obsta a una conclusión que, a la postre, convalide un despojo a los pasivos privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral (“Sánchez”, Fallos 328:1602, consid. 4).

Y ha subrayado que las previsiones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional se encuentran alcanzadas y complementadas por el mandato del artículo 75, inciso 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales (Fallos 327:4607).

**Así, estos principios/reglas esenciales no solo habilitan, sino que obligan al Poder Judicial a evaluar las decisiones legislativas cuando ellas no los respeten**.

Afirmar lo contrario equivaldría a vaciarlos de contenido real y comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino por incumplimiento de expresos compromisos convencionales.

Cuando el legislador, haciendo uso de sus atribuciones, vulnera las mandas esenciales contenidas en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales del artículo 75, inc. 22, y no cumple con deberes específicamente previstos en esas normas (arts. 14 bis, 28, 75, incs. 19, 22 y 23, entre otros) deben los jueces en general y la Corte Suprema de Justicia en especial, inaplicar las disposiciones legales que estén en pugna con ellas.

Es precisamente el carácter de último intérprete y guardián de la Constitución, reiteradamente reclamado para sí por el máximo Tribunal, el que debe llevar a la conclusión expuesta.

Desde 2017 a la presentación de la presente demanda se han sucedido cambios que no permiten tener una pauta clara de movilidad, y esa sucesión continúa con sus empalmes ha producido un daño en los haberes jubilatorios, dado que siempre el índice lo perjudica, y cuando podría mejorar, lo modificar.

En 2017 se aprobó la ley 27.426 cuyo primer aumento en marzo de 2018, producía un rezago de 6 a 9 meses para la movilidad, por lo que en ese año los jubilados perdieron un 19% contra la inflación. Esta ley tenía un componente salarial y otro inflacionario: 70 IPC y 30 Ripte.

En 2019, luego del anuncio de campaña del expresidente Fernández donde reconoció la pérdida sufrida por los jubilados en 2018 y que apenas asuma, les iba a “devolver el 20%”, no obstante, eso se dicta la ley 27.541, se suspendió la fórmula de movilidad durante 15 meses, y los jubilados perdieron un 20% más. Luego se dictó la ley 27.609 que entró en vigencia en marzo de 2021 que omitió un trimestre, que fue dejada sin efecto por el decreto 274/2024 el cual reconoció lo desastroso de la fórmula, y la insuficiencia de la misma, y la pérdida de los haberes respecto de la inflación, también reconocido por el gobierno saliente y el entrante en los fundamentos de los bonos “subsidios extraordinarios”, “refuerzos de ingreso previsional”, “ayudas económicas previsionales” tendientes a recomponer la pérdida sufrida por los haberes previsionales, y que continúan dándose hasta la fecha a los haberes mínimos.

A la presentación de la demanda la ley de movilidad goza de media sanción, los aumentos se están dando conforme IPC con rezago de dos meses, y los últimos 4 meses, producto de la baja de inflación , y la recomposición propia de los salarios, en épocas de recesión, atrasados respeto de la inflación, se observa que el ripte ha comenzado a subir respecto del IPC, es decir, que los salarios se empiezan a recomponer, pero los haberes jubilatorios NO, dado que actualmente están atados a la inflación. Cómo sea siempre pierden.

****

El planteo realizado por esta parte pretende que VS luego de hacer el recalculo del primer haber ver que este cumple con la manda de integralidad, recién ahí analice la pauta de movilidad, conforme lo acreditado en esta demanda, si la movilidad que se aplica a mi mandate cumple con el mandato que el convencional constituyente le dio al legislador, o por el contrario es insuficiente y el legislador ha incurrió en una inconstitucionalidad por omisión, máxime cuando desde 1984 a la fecha , los legisladores tienen menos injerencia en las políticas previsionales, por cuanto el poder ejecutivo ha tomado las riendas de la re distribución y del asistencialismo, olvidándose de las políticas de seguridad social que permitan mantener a los trabajadores del status que tenían en actividad, de manera tal que los reclamos por la insuficiencia de las prestaciones se han traslado a los estrados judiciales, reclamando que sea el poder judicial el que haga el control de constitucionalidad de las normas que dicta el legislador, haciendo de contrapeso y balance entre poderes, sin perder de vista que el centro del sistema de justicia debe ser el hombre que aspira a tener una sentencia justa.

**5.2.1** Solicito la inconstitucionalidad del art **7 inc. 2 de la ley 24.463** por cuanto considera que la movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas, afectando así el derecho de igualdad y el esfuerzo contributivo realizado por los adultos mayores, como así también por cuanto establece que *“en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”* lo cual es contrario al art 14 bis de la CN y a toda la jurisprudencia de la CSJN.

**5.2.2** Se declare la inconstitucionalidad de la movilidad establecida en el art. 32 de la ley 24.241, modificado por el art. 1° de la **Ley 27426**, solo en cuanto deja sin efecto los aumentos ya consolidados, solicitando expresamente que se aplique la movilidad devengada a la sanción de la ley, y que luego, sí se aplique la ley 27.426.

Se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones SSS N° 2-E-/2018 y 6/2018.

Se complemente la pérdida sufrida en 2018 por la aplicación de la ley 27.426 respecto de la inflación la cual fue del 19.8%.

**5.2.3**. Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 55 y 56 de la ley **27.541** Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (BO, 23.12.2019 - Ley 27.541) por violentar el principio de división de poderes y la garantía constitucional de movilidad e integralidad de los beneficios de seguridad social y las normas reglamentarias que impliquen una restricción en el haber jubilatorio de mi mandante e incumplan con la citada garantía constitucional y por ser contrarios a la misma base de la delegación del art 2 inc. e).

Se declare la inconstitucionalidad de la RES SSS 139/2020 y de los DNU 110/2018; 163/20, 495/20, 542/20, 692/20; 899/20, y normas concordantes por afectar el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, por ser regresivos, por violar el principio de progresividad, por no ser razonable ni proporcional

**5.2.4** Solicito declare la inconstitucionalidad de la ley **27.609** y su decreto reglamentario [104/2021](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-104-2021-347086/texto) y toda otra norma concordante por cuanto la ley 27.609 no se funda en los principios que deben inspirar la fijación de la garantía de movilidad jubilatoria, sino que lo hace en la sustentabilidad del sistema jubilatorio, dejando así períodos de movilidad sin considerar, haciendo que la emergencia dictada para el 2020 permanezca en el tiempo y que los haberes de los jubilados tengan una pérdida significativa, haciendo una incorrecta corrección en diciembre, y con una fórmula que en el alto periodo inflacionario que vivimos no permite que los haberes de los jubilados sean sustitutivos del salario, a lo que se agrega la falta de transparencia de la misma por cuanto a la fecha no ha sido publicado el índice por el cual se dan los aumentos, conforme el anexo 1 de la ley 27.609.

**5.2.5** Solicito repare el daño reconocido por el poder ejecutivo al dictar el decreto [274/2024](https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/305089/20240325) donde expresamente dice: “*Que la fórmula de movilidad vigente ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”*. Es esta afirmación surge que la fórmula de movilidad no fue adecuada, como también se infiere el que existió un daño por la notoria pérdida del poder adquisitivo.

En la disidencia realizada en los autos “CENDAN, RODOLFO LISANDRO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” Expte. N° FSA 6765/2022” ratifica lo que dice el decreto , que el daño ya se ocasiono, por lo que análisis ha realizar debe ser como el daño que ya fue ocasionado en vigencia de la ley 27.609.

Como bien señala precedente citado “*la movilidad determinada durante la vigencia de la ley (606,29%) se aleja excesivamente de los valores informados por la inflación registrada en el mismo período (IPC, 1188,20%) o incluso por los índices salariales (RIPTE 756,24%), lo que demuestra una afectación al mantenimiento del nivel de vida en relación al incremento de su costo (diferencia entre IPC y aumentos de ANSeS) que alcanza la friolera de 581,91 puntos porcentuales -95,97% de merma-, y que incluso se encuentra muy por debajo de los incrementos recibidos por el sector asalariado -149,95 puntos porcentuales*”

Le corresponde al poder judicial atender la petición solicitada, y reparar el daño que la aplicación de la ley 27609 le causa a mi mandante conforme se verifica con la liquidación que adjunto y que fuera admitida tanto por el poder ejecutivo como también por el legislativo, de un derecho que goza de la protección que otorga la garantía constitucional de movilidad, que tiene carácter alimentario y atañe a adultos mayores que integran el colectivo de vulnerable, que goza de especial protección. Como bien dice la disidencia citada, no puede ser que “*se carguen las consecuencias de decisiones improvisadas o negligentes de distintos poderes del Estado, sea que ello se considere como una falta de previsión, un incremento irresponsable del gasto o una displicente procura de su financiamiento”.*

**5.2.6 Movilidad futura**

A la fecha de presentación de la presente demanda, la movilidad de los haberes jubilatorios se está dando por decreto, no siendo esa una facultad del poder ejecutivo, aunque sirvió que venga a complementar la insuficiente pauta de movilidad de la ley N° 27.609 y que se fije de manera mensual el aumento en los haberes de los jubilados, por lo tanto hago reserva de plantear la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad, en caso de que la fórmula del ejecutivo o la que fije el legislador en el futuro no cumpla con el contenido que el convencional constituyente de 1957 previó al determinar que las jubilaciones y pensiones debían de ser móviles para que los jubilados puedan mantener el nivel de vida que tenían cuando estaban en actividad mediante la obtención de un beneficio que sea sustitutivo del salario, y que mantenga su valor durante el transcurso del tiempo.

**5.3 Pautas reclamadas**

Adjunto a la presente planillas de liquidación, las cuales forman parte de la presente demanda.

**5.3.1** **Haber inicial**

W de Caja : $39.811,25

Último haber : $35.154,81

W actualizada $45.062,21

PBU actualizada: $6.701,61

PC actualizada: $14.870,53

PAP Actualizada: $13.518,66

Primer haber reclamado: $35.090,80

Primer haber aplicando los fallos Soule/Blanco: $29.827,18

**5.3.2.** **Movilidad del haber**

Haber percibido en agosto 2024 $1.457.683,37

Haber a agosto de 2024 con 27551 con rezago de tres meses aplicando Soule $1.912.218,33.

Haber a agosto de 2024 con 27551 sin aplicando Soule: $2.937.814,10

Haber a agosto con ipc con dos meses de rezago: $3.010.603,90

La movilidad de la 27.609 perdió con todas las variables de la economía, por lo que solicito a VS fije un índice que reponga el daño sufrido y , hasta que salga la sentencia , haga el análisis respecto de las pautas de movilidad que se fije.



(la imagen también cambia)

**5.4** Solicito a VS que en la sentencia fije el haber adeudado a mi mandante, con el correspondiente retroactivo a la fecha inicial de pago que fije en la sentencia, o en su defecto intime a las partes a presentar liquidación a fin de fijar el monto del haber, de manera previa a que comience a correr el plazo de cumplimiento. La solicitud radica, en que el crédito reclamado es de carácter alimentario, y la etapa de ejecución tiene una demora que afecta el plazo razonable y la posibilidad cierta de que mi mandante obtenga una sentencia en tiempo oportuno.

Note VS que todos los pagos de Anses son observados por VS por cuanto se niega a cumplir con las pautas de la sentencia. A fin de acreditar lo expuesto, solicito libre oficio a la demandada a fin de que informe si su sistema informático para liquidar sentencias cuenta con los siguientes parámetros.

* 1. PBU : “Soule”/”blanco” , es decir actualizar la Pbu con isbic sin limitación temporal. Hacer la comparación con el haber reajustado, y luego la merma del 15%, siendo esa la quita máxima tolerable
  2. Tasa de complementación: 1,5% por año faltante en caso de insalubridad, conforme fallo “Fernández Pedro”.
  3. Tasa de sustitución: 70% de la W conforme “Sola Mariano”
  4. Movilidad: Si tiene los parámetros de Fernández Pastor para marzo de e 2018, Caliva, Márquez y Alanís para 2020 y empalme de Márquez previo a 27.609.
  5. Actualización de remuneraciones: Isbic al 2009 para remuneraciones anteriores al 2.09 de beneficios otorgados en vigencia de la ley 27.426 y ss.
  6. Tope del haber máximo: Movilidad del Tope del haber máximo, conforme “Inchaurrondo” y “Leonarduzzi”.
  7. Limitación de quita del 15% en cuestión de acumulación de Tope conforme “García Vidal”.

**6. Del fundamento de no disponibilidad de fondos**

Teniendo en cuenta que el fundamento del Estado, y a veces del poder judicial, respecto de que no hay recursos para afrontar el pago que se origina por los reclamos de los jubilados, resulta imperativo destacar que existen fondos suficientes para garantizar el pago de una adecuada prestación previsional en Argentina.

Gran parte del déficit fiscal del país se atribuye a la corrupción endémica, la cual ha sido evidenciada en numerosos casos resonantes, como los [escándalos de corrupción](https://www.clarin.com/politica/deficit-gigante-decenas-irregularidades-empresa-estatal-carbon-rio-turbio-busca-escapar-motosierra-milei_0_g8PafkJDYt.html) de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio y el caso Cuadernos, el [[otorgamiento](https://www.argentina.gob.ar/noticias/adorni-informo-que-se-descubrio-una-actividad-fraudulenta-por-casi-3500-millones-de-dolares) de pensiones asistenciales indebidas](https://www.argentina.gob.ar/noticias/adorni-informo-que-se-descubrio-una-actividad-fraudulenta-por-casi-3500-millones-de-dolares) , [desvío de fondo de cooperativas](https://www.infobae.com/politica/2024/05/22/el-listado-de-cooperativas-y-asociaciones-que-recibieron-mas-de-15-mil-millones-del-gobierno-de-alberto-fernandez/), entre otros. Argentina se ubica en una posición alarmante en el [Índice de Percepción de la Corrupción](https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-co) de Transparencia Internacional, lo que refleja la gravedad de este problema. Además, se ha documentado el cambio de destino y la forma en que se invirtió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), desvirtuando su propósito original.

Argentina no es un país pobre, sino uno que ha sido gravemente afectado por la corrupción sistémica, la cual se [lleva el 8% del PBI](https://www.worldcomplianceassociation.com/2081/noticia-la-corrupcion-le-cuesta-a-argentina-entre-el-8-y-el-10-del-pbi.html).

No es justo ni razonable culpar a los jubilados por las decisiones económicas y de inversión que han deteriorado la sustentabilidad del sistema previsional, y han afectado su proyecto de vida, ya que ellos no han tenido ni voz ni voto en dichas decisiones.

En consecuencia, es deber del Estado garantizar una adecuada prestación previsional, revirtiendo la situación actual mediante una gestión transparente.

**7. Tasa de interés**

Peticiono se aplique una tasa de interés que sea adecuada, dado que la desvalorización que sufre día a día la moneda torna confiscatorio todo pago que no compute una tasa que actualice adecuadamente los haberes adeudados, o de lo contrario, se abonen la cantidad de diferencias adeudadas a mi mandante a la fecha de manera retroactiva más los intereses, esto no es una actualización encubierta, sino el criterio de “salarios caídos” que se aplica en el fuero laboral, y es una cuestión de estricta justicia, más una tasa que repare el daño que produce la indisponibilidad de las sumas que forman parte de haberes de carácter alimentario y que cumpla con su función resarcitoria.

**8. Actualización por inflación**:

Solicito se declare la inconstitucionalidad del Art. 7 de la Ley Nº 23.928, con las modificaciones introducidas por el art. 4° de la Ley 25.561, por considerar que la desvalorización que a la fecha ha sufrido la moneda, torna confiscatorio todo pago que no la compute y por favor tenga en cuenta la situación real de los jubilados, donde ya se ha reconocido el daño que la aplicación de la ley 27.609 produjo en su haber, tanto por el poder ejecutivo como por el poder legislativo. A ello se le suma que los índices con los que se elabora la fórmula de movilidad, como también los que usara esta parte para comparar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, sea RIPTE o IPC, tienen un rezago en su elaboración de 6 meses, por lo que todo llega tarde al jubilado y el Estado se financia con el crecimiento de la litigación previsional, máxime que en algunos períodos la inflación super en 3 veces la tasa de interés que se usa en las sentencias previsionales, por lo cual no se mantiene el valor del porcentaje del haber que mi mandante no percibió , y la exigua tasa de interés, no cumple con la finalidad siquiera resarcitoria, dado que no mantiene actualizado el valor del capital adeudado , de una deuda alimentaria.

**9. Costas:**

Solicito se declare la inconstitucionalidad del art 21 de la ley 24.463 y se impongan las costas a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota, teniéndose en cuenta los gastos en los que incurrió mi mandante para iniciar el presente proceso. Adjunto comprobante.

Solicito se declare la inconstitucionalidad del art 3 Decreto 157/2018 por cuanto pretende derogar el art 36 de la ley 27.423 conforme los resuelto por la CSJN en “Morales, Blanca Azucena”, por cuanto no se verificó la existencia de circunstancias excepcionales que exige el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para su validez, y, por ende, debe reafirmarse la plena vigencia del artículo 36 de la ley 27.423

**10. Honorarios**:

Solicito se regulen los honorarios por la etapa administrativa y por la labor desarrollada en autos, conforme la ley 27.423, la cual es de orden público, omitiendo realizar interpretaciones jurisprudenciales que afecten los porcentajes mínimos de ley y perjudiciales al abogado, teniendo en cuenta el resultado del pleito y la actuación en estos actuados, afectando los mínimos de ley.

**11. Ganancias**:

Solicito a V.S. que declare la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 (Decreto 649/97) y del art.115 de la Ley 24.241 en la medida que al practicarse la liquidación del haber, conforme pautas ordenadas en la sentencia, éste supere el mínimo no imponible tornándose pasible de tributar el impuesto a las ganancias (ley 27.346); asimismo solicito que en la sentencia a dictarse, que la retroactividad emergente de la misma no debe ser sometida a ninguna retención por el Impuesto a las Ganancias, en consonancia la Cámara Federal de Salta en el Plenario "Percivaldi Roberto Rene c/ANSES s/Apela Resolución· Expte N º 31000160/2009 del 29-12-2020, el cual teniendo en cuenta la jurisprudencia de la CSJN en “García María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” CSJN, 26.03.2019 y “García Marta Susana c/ ANSES s/ reajustes varios” CSJN, 10.09.2020 , entendió que el análisis de la capacidad contributiva -de beneficiarios de prestaciones de la seguridad social- no debe convertirse en el único parámetro para establecer el tributo, sino que también debe ponderarse la vulnerabilidad vital del colectivo involucrado.

**12. Intereses sancionatorios**:

Solicito a VS que, en caso de que la demandada fuera reticente en cumplir INTEGRAMENTE con la manda judicial en el plazo que se le otorgue, se fijen intereses sancionatorios desde el vencimiento del plazo a fin de compeler al deudor contumaz a cumplir con el pago de su obligación que tiene carácter alimentario y goza de especial tutela, fijando expresamente el índice a utilizarse y desde cuando se deberían los mismos en caso de incumplimiento, y que los mismos se notifiquen en la sentencia.

**13. Solicito control de convencionalidad:**

Se solicita a V.S. que realice el respectivo control de convencionalidad de las normas que definen el haber previsional, pues con la aplicación de estas, se *afectaría el principio de progresividad de los derechos sociales* consagrados en varios tratados internacionales de jerarquía constitucional.

En efecto, la Corte IDH señala con contundencia que el control de convencionalidad por parte de los jueces nacionales es un “deber”, es decir, está formulado en términos de obligación y no de mera recomendación.

Los jueces deben recordar que más allá de la interpretación que cada uno pueda tener respecto a tal o cual derecho humano, forman parte de un órgano estatal que ya ha asumido un compromiso que no pueden relegar.

Así lo tiene dicho la CIDH en el caso [“Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”](https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/trabajadorescesados.pdf), del 24 de noviembre de 2006, en donde en su considerando 128 y en el marco del caso “[Gelman vs. Uruguay](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf)”, sentencia de fecha 24 de febrero de 2011, la CIDH considera que “no sólo los tribunales deben aplicar y realizar el control de convencionalidad, sino que también, corresponde a “todos los órganos” de los Estados que han ratificado la CADH formular dicho control, velando por la eficacia del Pacto. Puntualmente se dijo que *“los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles” están obligados a ejercer aún de oficio, el control de convencionalidad”*.

En este sentido, no resultará posible cumplir con los principios antes mencionados, si no existe una paridad entre las partes del proceso y sobre todo cuando el órgano que tiene a cargo la acusación obstaculiza a la justicia, sin legitimidad y sin control.

Para el improbable e hipotético caso de que V.S. no merituara las circunstancias de hecho y de derecho formuladas por esta parte, no haciendo lugar a la presente acción, dejo desde ya formulado la pertinente reserva del Caso Supranacional, para concurrir por ante los Organismos Internacionales, con fundamento en el art. 75 inc. 22 de la C.N. para el caso que fuera rechazada la pretensión deducida.

**14. Solicito control de constitucionalidad. Planteo cuestión federal.**

Solicito a VS haga el debido control de constitucionalidad de las normas en juego que esta parte reputo como inconstitucionales a lo largo de todo el planteo formulado, donde marcó con que norma constitucional entra en conflicto de cada una de ellas.

Si bien es sabido que la última ratio del juez debe ser la inconstitucionalidad de la norma, del desarrollo de la demanda se observa claramente la omisión del Estado en fijar una política de estado adecuada a la Constitución Nacional, para los adultos mayores de nuestro país sea por acción o por omisión.

Desde [“Ekmekdjián c/Sofovich”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7847391) (Fallos 315:1492), en 1992 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que "*entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto* (se refiere al de San José de Costa Rica), *deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales*" (c. 22).

Y por ello se ha resaltado que “*Si bien la racionalidad de las decisiones legislativas no es una cuestión sobre la que deba pronunciarse la magistratura, el art. 1° de la Constitución Nacional impone la racionalidad a todos los actos de gobierno de la República, y la republicana separación de poderes debe ser funcional a ese objetivo y nunca un obstáculo a éste. Por tanto, si la inadecuación de medios afines, como resultado de una prolongada experiencia, se torna palmaria, la regla general cede en beneficio de la plena vigencia del mismo principio republicano y queda habilitado el control judicial sobre la decisión legislativa”* (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni en “Itzcovich”, Fallos 328:566).

Ello así en el entendimiento que “*El control de constitucionalidad de las normas constituye: i) un deber ineludible de los tribunales de justicia que debe realizarse en el marco de una causa concreta; ii) debe efectuarse aun de oficio sin que sea exigible una expresa petición de parte interesada; y iii) resulta procedente en la medida en que quede palmariamente demostrado en el pleito que el gravamen invocado puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera”* (Fallos 335:2333).

Y esta atribución le compete en especial a la Corte Suprema, como intérprete final de la Constitución Nacional y como guardián último de las garantías superiores de las personas y partícipe en el sistema republicano de gobierno (Fallos 329:2316 y 344:3725, entre muchos otros).

En cumplimiento de ese rol esencial y en lo que hace a decisiones emanadas del Poder Legislativo en temas vinculados con distintos aspectos de la seguridad social y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y convencionales, nuestro más alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 49, inciso 4°, párrafo 1° de la ley N° 24.241 (“Giménez” Fallos 344:1788); y la del artículo 7, inciso 2 de la ley N° 24.463 (“Badaro II”, Fallos 330:4866), entre otras, sin que pueda argumentarse válidamente que en esas oportunidades la Corte Suprema excedió su área competencial en desmedro del legislador y vulneró la manda de la separación de los órganos del poder derivada del principio republicano de gobierno receptado expresamente en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional.

Ello así en tanto las competencias del Poder Legislativo en la materia, hallan una vara infranqueable en los lineamientos adoptados por el convencional constituyente (con especial hincapié en los de 1957 y de 1994) en cuanto a la particular protección de los derechos sociales, a la que deben adecuar sus decisiones.

Esta idea ha sido afirmada en más de una oportunidad por la Corte Suprema, la que ha venido resaltando la actual vigencia en la materia de los principios de no regresividad y pro homine derivados de normas constitucionales y convencionales actualmente vigentes que resultan vinculantes para todos los órganos del Estado.

Sin intentar agotar la reseña y a mero modo de ejemplo, en “García” (Fallos 342:411) ese Tribunal afirmó que “*a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos”* (Consid. 15) y enfatizó que “*el control judicial del cumplimiento de este imperativo constitucional no implica desconocer el principio de división de poderes*” (Consid. 16).

Es que la misma Corte Suprema se encargó de manifestarse “*particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (art. 75, inc. 23)”* (Consid. 21).

Más adelante, en “Giménez” (Fallos 344:1788) continuó por la misma senda jurisprudencial y resaltó: “*A partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos y dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico*”, ello porque sostuvo que la “*reforma constitucional de 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de la tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de acción positiva -traducidas tanto en discriminaciones inversas cuanto en la asignación de cuotas benignas- en beneficio de ellas*” (Consid. 7, el subrayado no está en el original).

Por ello recordó su jurisprudencia en materia de seguridad social, en la que el Tribunal se manifestó “*particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (art. 75, inc. 23)*” (Consid. 23).

Todo ello la llevó a entender en “Blanco” que correspondía “*llevar a conocimiento del Congreso Nacional la presente decisión a fin de que en un plazo razonable haga uso de las atribuciones constitucionales que le competen para hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado, fijando el contenido concreto de las jubilaciones en el período en debate, con especial ponderación de los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por este Tribunal en numerosos precedentes (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602), de conformidad con la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales*” (Consid. 25. El subrayado me pertenece).

Y agregó, con cita del Comité DESC, que “*es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos*” (Consid. 26).

Algo similar sucedió en el ya mencionado caso “García” en el que se analizaba una decisión también reservada al Poder Legislativo por la Constitución Nacional, como lo es la atribución tributaria. Allí, si bien la Corte dejó en claro que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial le quepa pronunciarse, agregó que los casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces (Consid. 6).

Es por todo lo expuesto que hago reserva del recurso extraordinario que prevé la ley 48 para recurrir oportunamente ante la C.S.J.N.; en tanto están juego la interpretación de normas federales por cuanto la forma de calcular el haber por parte de Anses contraria el art 1, 14bis,16,17,18, 33, 75 inc 19,22 y 23 de la CN por cuanto afecta el derecho a tener un haber integral, jubilaciones y pensiones móviles, el principio de igualdad, de propiedad, de un debido proceso, de proyecto de vida, de desarrollo humano , y la normativa supranacional.

**15. AUTORIZACION**

Autorizo expresamente a la Dra. Carola Espin, Dr. César Rodríguez Galíndez, Srta. Mariana Molina, Srta. Ana Paula Otamendi y Dra. Valentina Véliz Miguens, a efectuar desgloses, dejar nota y todo acto útil para impulsar el procedimiento.

**16. DILIGENCIAMIENTO OFICIOS LEY**

Solicito autorice a mi persona Dra. Julia Toyos, a la Dra. Carola Espín, y/ a quienes designemos a realizar las diligencias que sea necesario realizar en Capital Federal.

**17. PRUEBA**

Se ofrece:

* 1. Documental:
     1. Acta Poder
     2. Copia del DNI
     3. Detalle de beneficio
     4. Constancia de turno e inicio de trámite para reclamo administrativo
     5. Nota de reclamo administrativo
     6. Resolución denegatoria
     7. Computo del haber de caja y reajustado
     8. Constancia de gastos
     9. Equiparación de haberes
     10. Historial laboral.
     11. Anexo con Informes elaborados sobre lo planteado, con los vínculos sobre lo argumentado en los presentes autos.

**1.3 Prueba informativa:**

* + 1. **ANSES**:
       1. Expediente administrativo de reconocimiento de servicios, jubilación y reajuste que se encuentra en el archivo de la ANSES; cuya remisión al Juzgado se solicita, en caso de ser necesario, en virtud de lo dispuesto por el art. 388 del CPCCN.
       2. Informe sobre lo requerido en el punto 5.4

En caso de que la demandada ANSES, una vez intimada no acompañe los expedientes administrativos o lo haga en forma deficiente, solicito se haga efectivo el apercibimiento de la última parte del art. 388 del CPCCN, y la negativa a presentarlos constituirá una presunción en su contra.

**18. PETITORIO**

Por lo anteriormente expuesto solicito:

1. Que se me tenga por presentada, por parte, por constituido domicilio procesal, electrónico y denunciado el real a todos los efectos legales.
2. Que se tenga por entablada Demanda en contra de la ANSES, en legal tiempo y forma.
3. Que se haga lugar a lo peticionado en el punto III del objeto conforme los fundamentos desarrollados en la demanda.
4. Que se haga reserva del Caso Federal o de la Articulación del Recurso Extraordinario por ante la Corte Suprema.
5. Que se tenga por presentada la prueba documental acompañada y por ofrecida la restante.
6. Que se realice el pleno reconocimiento de los derechos de mi mandante y oportunamente se haga lugar a la solicitud de Reajuste del Haber de Origen, con más la movilidad correspondiente en virtud del derecho que hace a mi parte y al consecuente pago retroactivo de las sumas por capital, actualización monetaria e con costas a la vencida.

**PROVEER EN CONFORMIDAD.**

**Será Justicia**

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente